EL TÍTULO EJECUTIVO COMO COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En primer lugar, resulta importante definir la intimación, esta, es la notificación o declaración de un mandamiento u orden que deben ser especialmente cumplidos; para Ossorio (2000, p.534) *“es aquella que proviene de la acción de intimar, declarar, notificar, hacer saber una cosa, especialmente con autoridad o fuerza para ser obedecido, o requerimiento compulsivo de índole fiscal, exigiendo a los contribuyentes el pago de los impuestos atrasados”*.

Ahora bien, el procedimiento de intimación se encuentra señalado en el artículo 222 del Código Orgánico Tributario, el cual dispone que *“Al día siguiente del vencimiento del plazo legal o judicial para el cumplimiento voluntario, se intimará al deudor a pagar las cantidades debidas y el recargo previsto en el artículo 226 de este Código, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de su notificación”*.

El Texto Orgánico Tributario, deja claro que la intimación efectuada constituye título ejecutivo para proceder contra los bienes y derechos del deudor o de los responsables solidarios; asimismo, la intimación, no estará sujeta a impugnación por los medios establecidos en el Código Orgánico Tributario.

Sin embargo, la intimación pudiera estar sujeta a impugnación, si la Administración Tributaria en el Acta de Intimación de Derechos

Pendientes, se dispone a calcular ajustes de sanciones e intereses de mora de reparos calculados inicialmente en una sentencia definitiva, y en Resoluciones de Imposición de Sanción, lo cual pudiere obrar en perjuicio de los contribuyentes, en virtud de requerirles el pago de unas sumas de dinero desconocidas hasta ese momento, violentando el derecho a la defensa de los contribuyentes, por la imposición al pago de montos, sin un procedimiento administrativo previo.

Así pues, contra dichos actos administrativos, pudiera ejercerse el control jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico Tributario, según el cual *“Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares, que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo, mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este Capítulo”*, en concordancia con el artículo 286 *eiusdem*. (Vid. sentencia número 00859 dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30 de junio de 2011, caso: *Escalante San Cristóbal, C.A.*).

Respecto al juicio ejecutivo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión número 000675 del 10 de junio de 2015, caso: *Sucesión De María Concepción Gullías Barreiro*, realizó algunas precisiones acerca de la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo, indicando lo siguiente:

1.- Se trata de un proceso expedito cuyo

objetivo es el cobro de un crédito que el contribuyente o responsable debe a la República, Estados o Municipios por concepto de tributos, sanciones de multa e intereses moratorios, los cuales no fueron pagados de manera voluntaria.

2.- La demanda de ejecución de créditos fiscales se fundamenta en la necesidad de recaudar lo adeudado por el contribuyente o responsable, representado en un título ejecutivo, el cual consiste en un documento donde se evidencian los créditos existentes a favor del Fisco por concepto de tributos, sanciones, intereses o recargos determinados y exigibles, que no han sido pagados, por consiguiente, al ser presentado en juicio aparece el embargo de bienes del deudor, tal como lo prevé el artículo 289 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente para la oportunidad de la interposición del juicio ejecutivo. (*Vid.* sentencias de esta Sala Político-Administrativa números 00941 del 25 de junio de 2009, caso: *Fosforera Suramericana, C.A.* y 01073 del 2 de octubre de 2013, caso: *C.A. Venezolana de Ascensores*).

3.- Los juicios ejecutivos califican como materia de orden público, por encontrarse vinculados con los ingresos tributarios previstos en el Presupuesto Público, por ende, con los recursos patrimoniales de la República orientados como están a un fin social. (*Vid.* decisión de esta Sala Político-Administrativa número 00729 del 20 de junio de 2012, caso: *Distrito Metropolitano Vs. C.V.G. Internacional, C.A.*). El Código Orgánico Tributario en su Sección referida al Procedimiento de

Cobro Ejecutivo dispone en su artículo 226 que *“El cobro ejecutivo de las cantidades líquidas y exigibles, así como la ejecución de las garantías constituidas a favor del sujeto activo, se efectuará conforme al procedimiento establecido este Capítulo.*

La competencia para iniciar e impulsar el mismo y resolver todas sus incidencias corresponde a la Administración Tributaria.

El procedimiento de cobro ejecutivo no será acumulable a las causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación se suspenderá únicamente en los casos previstos en este Código”.

Ahora bien, es preciso señalar que a la Administración Tributaria le resulta más conveniente efectuar el Cobro Ejecutivo previsto en el Código Orgánico Tributario, pues la historia de los Códigos que han entrado en vigencia nos indica que si bien la eliminación de la suspensión de efectos “*ope legis*” no supuso técnicamente la reedición del contra principio del “*solve et repete*”, lo cierto es que se colocó al contribuyente en una situación de desigualdad procesal frente al Fisco Nacional, pues con la exigencia de la concurrencia de los extremos establecidos en la norma para otorgar la suspensión de efectos del acto recurrido, podría caer el contribuyente en el absurdo extremo que, demostrando el grave perjuicio que la ejecución del acto podría causarle, el sujeto activo pretendiese ejecutar sus bienes por la debilidad patrimonial que ha sido demostrada por el sujeto pasivo para asumir la obligación tributaria que está siendo debatida en juicio.